



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 11/12/2020.

Radicado	08001-33-33-014-2017-00098-00
Medio de control o Acción	Ejecutivo
Demandante	Yocasta Alcalá Terán
Demandado	Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduprevisora S.A.—
Juez	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor Juez, paso a su despacho la solicitud de iniciación de proceso ejecutivo promovida por la parte demandante.

PASA AL DESPACHO
A fin que se pronuncie acerca de librar o no el mandamiento de pago solicitado.

CONSTANCIA

ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Último Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, once (11) de diciembre de dos mil veinte (2.020).

Radicado	08001-33-33-014-2017-00098-00
Medio de control o Acción	Ejecutivo
Demandante	Yocasta Alcalá Teran
Demandado	Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduprevisora S.A.
Juez	Guillermo Osorio Afanador

CONSIDERACIONES.

La señora **Yocasta Alcalá Terán**, actuando a través de apoderado especial, instauró demanda ejecutiva para que previo los trámites de ley, se acceda a que se libere el pago en su favor y en contra de la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduprevisora S.A., en aras del cobro forzoso de lo ordenado en una sentencia proferida por este despacho judicial.

Entendiéndose el proceso ejecutivo como el medio o instrumento judicial para obtener el cumplimiento forzoso de obligaciones de dar, hacer y no hacer, a favor de un acreedor y en contra de un deudor que no han sido cumplidas, basadas en un título ejecutivo simple o complejo, que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible ante la justicia.

La doctrina define el proceso ejecutivo como seguidamente se cita a continuación:

"El proceso ejecutivo no tiene por objeto como el de conocimiento, declarar un derecho dudoso, sino hacer efectivo el que ya existe, reconocido en una prueba preconstituída. Carnelutti dice que los procesos ejecutivos tienen como fin "satisfacer una pretensión" y Chiovenda advierte que su finalidad es "lograr la actuación práctica de la ley".¹

Sobre el particular, el H. Consejo de Estado, en reiterados pronunciamientos, entiende el proceso ejecutivo como a continuación se cita textualmente:

"El proceso ejecutivo tiene su fundamento en la efectividad del derecho subjetivo del ejecutante que consiste en la facultad de reclamar el cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible contenida en el título ejecutivo y cuyo titular es el ejecutante acreedor; tiene por finalidad asegurarle a éste la satisfacción de su acreencia mediante la utilización de medios coercitivos legítimos y legales (art. 488 C. P. C.). A ello se debe que la obligación por cuyo cumplimiento se reclama o se pretender ejecutar ante el poder jurisdiccional del Estado debe tener esas tres características – obligación clara, expresa y exigible

¹ MONROY CABRA, Marco Gerardo Procesos Ejecutivos, declarativos y cautelares Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal N° 2. Pág. 50, 1984.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

*- las cuales se deben revelar o contener o en el documento si el título es simple
o en el conjunto de documentos si el título es complejo.²*

Descendiendo a estudiar la demanda ejecutiva formulada por la señora Yocasta Alcalá Terán, actuando a través de apoderada especial, pretende que el despacho libre mandamiento de pago a su favor y en contra de la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduprevisora S.A., por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE Y DOS CENTAVOS **(\$38'392.476.22)** por concepto de la diferencia que le fue dejada de cancelar más los interés corrientes que comenzaron a correr de nuevo al finalizar el término perentorio del inciso segundo del artículo 192 del CPACA. Lo anterior en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia adiada 4 de agosto de 2017, proferida por este despacho judicial, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Sin más preámbulos, el despacho procede a estudiar la demanda ejecutiva en aras de proveer lo que en derecho corresponda.

El artículo 422 del Código General del Proceso aplicable por remisión del artículo 299 del CPACA, establece las condiciones *formales* y de *fondo* que debe reunir un documento para que de él se pueda predicar la existencia de título ejecutivo. Las condiciones formales buscan que los documentos que integran el título conformen unidad jurídica, que sean auténticos, y que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme. A su vez, las condiciones de fondo, buscan que en los documentos que sirven de base para la ejecución aparezcan consignadas obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, que sean líquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero.³

A su turno el artículo 297 del CPACA, considera título ejecutivo a las:

“1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

(…)”

Quiere decir lo anterior que, para que una obligación pueda demandarse ejecutivamente debe constar en un documento que provenga del deudor y que, además, sea expresa, clara y exigible. Al respecto el Consejo de Estado ha sostenido:

“

² H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de fecha 2 de octubre de 2003, C.P.: Dra. María Elena Giraldo Gómez.

³ Consejo de Estado – Sección Tercera, auto de 16 de septiembre de 2004, radicado al número 26.726. Consejera Ponente María Elena Giraldo Gómez.

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

1. Que la **obligación sea expresa**: Quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente.
2. Que **sea clara**: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor).
3. Que **sea exigible**: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta.
4. Que la obligación **provenga del deudor o de su causante**: El título ejecutivo exige que el demandado sea el suscriptor del correspondiente documento o heredero de quien lo firmó o cesionario del deudor con consentimiento del acreedor.
5. Que el documento **constituya plena prueba contra el deudor**: La plena prueba es la que por sí misma obliga al juez a tener por probado el hecho a que ella se refiere, o en otras palabras, **la que demuestra sin género alguno de duda la verdad de un hecho, brindándole al juez la certeza suficiente para que decida de acuerdo con ese hecho**. Por consiguiente, para que el documento tenga el carácter de título ejecutivo, deberá constituir plena prueba contra el deudor, sin que haya duda de su autenticidad y sin que sea menester complementarlo con otro elemento de convicción, salvo los eventos de título complejo como en el presente caso".⁴

El título del cual pretende el demandante su solución de pago por vía ejecutiva se encuentra contenido en la sentencia de fecha 4 de agosto de 2017 proferida por este despacho judicial, providencia que no solo se aprecia en el expediente del referido proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sino también en copia autenticada en fecha 12 de marzo de 2020, expedida por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, decisión que se encuentra ejecutoriada a partir del día 31 de octubre de 2017.

La referida providencia, contempla el pago de una suma líquida y concreta de dinero a favor del ejecutante. Al efecto, se lee en la parte resolutive de la citada sentencia, lo siguiente:

***“TERCERO.-** como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento el derecho, Condénese a la Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a favor de la señora YOCASTA ALCALA TERAN, identificada con la cédula de ciudadanía No 32-849-137, la suma de VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$21.949.081,20), por concepto de sanción moratoria, generada desde el 9 de octubre de 2013 hasta el 11 de diciembre de 2014, por el no pago oportuno de las cesantías parciales reconocidas a través de la resolución No 0665 del 7 de septiembre de 2013, expedida por la entidad demandada.*

***CUARTO.** El valor de la condena se actualizará aplicando para ello la fórmula establecida en la parte motiva de este proveído, en aplicación del artículo 187 del CPACA.*

⁴Sentencia del 22 de junio de 2001, Consejo de Estado, C.P. Ricardo Hoyos Duque, expediente 44001 23 31 000 1996 0686 01 (13436), Demandante: Eduardo Uribe Duarte, Demandado: Departamento de la Guajira.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

QUINTO. CONDENESE en costas a la entidad pública demandada. **FÍJENSE** las *agencias en derecho en la suma de Cuatro millones cuatrocientos seis mil doscientos cuarenta y dos pesos M.C. (\$4.406.242).*

Es decir, la sentencia que se exhibe en la foliatura del expediente como título ejecutivo, contiene una orden de dar clara, expresa, y exigible por la suma dejada de pagar a la demandante.

Junto con la demanda se allegaron, además de la sentencia respectiva, los siguientes documentos relevantes:

- Copia autenticada del acta de audiencia realizada el día 4 de agosto de 2017, por el Juzgado 14º Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, donde se profirió la sentencia objeto de la presente demanda ejecutiva.
- Constancia de ejecutoria y autenticidad de la providencia de fecha 04 de agosto de 2017 proferida por el secretario de este despacho judicial.
- Comprobante del pago por la suma de \$5.220.739 realizado el día 06 de agosto de 2018 por el Banco BBVA a la demandante.
- Paz y salvo por todo concepto en relación con los servicios prestados, que expide el apoderado que representó a la demandante en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
- Poder que otorga la demandante al Dr. JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA
- Revocatoria de poder que hace la demandante al Dr. YOVANY LOPEZ QUINTERO

Así las cosas, cuando el título de recaudo sea una providencia judicial, el proceso ejecutivo, puede promoverse, porque la entidad pública, no acató la orden judicial o lo hizo, pero de manera parcial o porque se excedió en la obligación impuesta en la providencia; en tales casos de incumplimiento, se podrá exigir el pago, por vía judicial, de la obligación contenida en la sentencia judicial debidamente ejecutoriada, acorde con lo dispuesto en el artículo 297 del C.P.A.C.A.

Teniendo en cuenta que el título ejecutivo contiene una decisión concreta de pagar a la demandante señora Yocasta Alcalá Terán a título de sanción moratoria generada por el no pago oportuno de las cesantías parciales reconocidas a través de la Resolución No. 0665 del 7 de septiembre de 2013 expedida por los demandados, y que de la suma de dinero que le fue reconocida, según lo dicho por el ejecutante, le fue cancelado \$5.220.739, el Despacho considera que el valor restante pendiente de pago, corresponde a la suma de Veintiún Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos (\$21.134.584) más los intereses moratorios, los cuales se liquidarán al momento de la liquidación del crédito, con base en los parámetros establecidos en la ley para la liquidación de los mismos.

El valor anterior, resulta de la suma de \$21.949.081, *por concepto de sanción moratoria, generada desde el 9 de octubre de 2013 hasta el 11 de diciembre de 2014, más la suma de \$4.404.242 por concepto de costas procesales, menos los \$5.220.739 que el ejecutante manifiesta que le fueron consignados como pago parcial.*

Es del caso señalar que para la liquidación del crédito se debe considerar el pago parcial realizado y que cuando se efectuó, ya se habían generado intereses moratorios, los cuales no se tuvieron en cuenta para librar mandamiento y que se deberán considerar en la liquidación del crédito que se presente.

En consecuencia, se librándose mandamiento de pago por vía ejecutiva a favor de la señora Yocasta Alcalá Terán y en contra de la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduprevisora S.A., será por la suma Veintiún Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos (\$21.134.584) más intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia de fecha 04 de agosto de 2017 proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, hasta el momento del pago efectivo de la obligación.

Por otro lado, es del caso mencionar que obra en el expediente poder suscrito por la señora Yocasta Alcalá Terán, por medio del cual le confiere poder especial al profesional del derecho Juan Carlos Corredor Bonilla, en ese sentido, se le reconocerá personería adjetiva, en los términos y para los efectos del poder a él conferido.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla.

RESUELVE:

1º.- LÍBRESE mandamiento de pago por vía ejecutiva a favor de la señora Yocasta Alcalá Terán, y en contra de Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduprevisora S.A., por la suma Veintiún Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos (\$21.134.584) más intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia de fecha 04 de agosto de 2017 proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, hasta el momento del pago efectivo de la obligación.

2º. ORDÉNASE a la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduprevisora S.A.— que en el plazo de cinco (5) días, cumplan con su obligación consignada en el literal anterior.

3º. Notifíquese personalmente al Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduprevisora S.A, conforme lo dispuesto en el artículo 290 del Código General del Proceso. Para el efecto envíese por Secretaría copia virtual de la presente providencia y de la demanda.

4º. Notifíquese personalmente al Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduprevisora S.A, conforme lo dispuesto en el artículo 290 del Código General del Proceso. Para el efecto envíese por Secretaría copia virtual de la presente providencia y de la demanda.

5º. Notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público, conforme lo dispuesto en el artículo 290 del Código General del Proceso. Para el efecto envíese por Secretaría copia virtual de la presente providencia y de la demanda.

6º. Notifíquese personalmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme lo dispuesto en el artículo 290 del Código General del Proceso. Para el efecto envíese por Secretaría copia virtual de la presente providencia y de la demanda al correo procesos@defensajuridica.gov.co

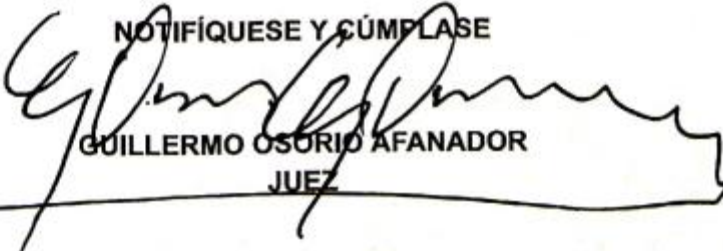
7º. Notifíquese por estado a la parte demandante.

8º. Conforme lo dispuesto en el artículo 442 del C. G del P., córrase traslado de la demanda a la entidad ejecutada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el término de diez (10) días, para efectos que dentro de dicho lapso propongan excepciones de mérito que estimen pertinentes, y allegar con la respuesta todas las pruebas que tenga en su poder, y que pretenda hacer valer dentro del proceso.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

9º. Reconócese personería adjetiva al doctor Juan Carlos Corredor Bonilla como apoderado de la demandante señora Yocasta Alcalá Terán, conforme al poder otorgado en legal forma.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO

Nº 140 DE HOY 14/12/2020 A LAS 8:00 A.M.



ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA